

Hace 30 años 5 de febrero: huelga policial, saqueos e incendios en Lima

Manuel Valladares Quijano
Universidad Nacional Mayor de San Marcos
E-mail: bibcent@unmsm.edu.pe

RESUMEN

Los acontecimientos ocurridos en Lima el 5 de febrero de 1975, estremecieron el poder político del gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado. Por una parte, revelaron por lo menos dos graves problemas: el agotamiento del proceso de reformas en el contexto de la crisis internacional de la economía capitalista y la agudización de tensiones y conflictos al interior de las Fuerzas Armadas. Por otra parte, anunciaron el pronto advenimiento de un nuevo gobierno que concluiría formalmente con el proceso de reformas.

PALABRAS CLAVE: Régimen militar, Velasco, Perú, disturbios, Lima, Estado, APRA.

ABSTRACT

The events that unfolded in Lima on February 5th, 1975, unsettled General Juan Velasco's military regime, laying bare its weaknesses. Indeed, since then –against the backdrop of the world capitalist crisis– it became evident that the reformist process had come to an end, and that the conflicts within the armed forces had reached a point of high tension. Also, the February 5th events heralded the imminent advent of a new government that officially would close the reformist period.

KEY WORDS: Military regime, Velasco, Peru, Disturbances, Lima, State, APRA.

Hace 30 años, el 5 de febrero de 1975, Lima y el Callao y todos sus distritos amanecieron sin protección policial y desguarnecidos en su seguridad cotidiana como ciudades gigantes y populosas que ya eran. En horas de la madrugada se había iniciado una huelga por una serie de reivindicaciones del personal de la Guardia Civil que normalmente prestaba servicios tanto en las comisarías como resguardando diversos puntos de la capital y de la vecina provincia constitucional: zonas comerciales, mercados, bancos, edificios públicos, tránsito en las principales

avenidas, etc. Al amanecer y al movilizarse en todas las direcciones cientos y miles de personas con destino a sus centros de trabajo, el mismo que arrancaba entre las siete y las ocho de la mañana, no se había visto un solo Guardia Civil en ningún lugar. Tampoco a miembros de otros cuerpos o unidades policiales. Vale la pena recordar que en ese entonces existían tres cuerpos diferentes de lo que ahora se llama Policía Nacional: Guardia Civil, Guardia Republicana y Policía de Investigaciones del Perú (PIP). Una significativa cantidad (varios cientos) del personal de la Guardia Civil, cabeza y columna vertebral de la rebelión, se había acantonado en el local de Radio Patrulla de la Av. 28 de Julio del distrito de La Victoria.

En medio de esa situación de desconcierto, más o menos desde las 10 de la mañana, comenzaron a movilizarse por diferentes calles y avenidas del viejo centro de Lima grupos de personas de sectores populares, fundamentalmente jóvenes, que provocaban disturbios y llamaban a saqueos, incendios y otras acciones de vandalismo. Unos minutos más tarde, estos saqueos, incendios, pillajes, etc., comenzaron a producirse precisamente en el centro histórico de la capital y pronto se multiplicaron a otros barrios y distritos. Desde luego, velozmente y en términos multitudinarios había crecido la cantidad de gente que sin habérselo propuesto de antemano pasó a dominar la escena poniendo en marcha las más diversas modalidades de violencia contra la propiedad pública y privada. Aproximadamente durante las dos o tres horas de imperio creciente de la violencia, no apareció en escena ninguna fuerza gubernamental civil, militar o policial que contuviera a sus furiosos protagonistas. Recién a partir hasta las 12:30 pm o de la 1:00 pm salieron en fila desde el Polígono del Rímac algunos tanques y en la medida que avanzaban con diferentes rumbos y ocupaban sus emplazamientos empezaron a dispersarse las multitudes que por varias horas se habían adueñado de la situación.

¿Cómo pudieron suceder esos acontecimientos bajo un gobierno que gozaba de mucho prestigio a nivel nacional e internacional? Es cierto que internamente el gobierno del general Velasco Alvarado enfrentaba enemigos y adversarios políticos, pero también contaba con el apoyo y la simpatía de significativos sectores de la sociedad peruana. Los enemigos políticos lo conformaban exiguas minorías que habían perdido poder y privilegios y que, sin duda, invertían buena parte de su tiempo en conspirar y en ese plan probablemente andaban pescando contactos al interior de la oficialidad de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Los adversarios políticos estaban representados por dirigentes de partidos, organizaciones y movimientos que se disputaban entre sí la hegemonía en la dirección ideológica y política de los trabajadores y masas populares (movimiento obrero, movimiento campesino, movimiento barrial, movimiento magisterial, movimiento estudiantil, etc.) y, como tales, debatían entre sí y con los representantes del gobierno, con sus teóricos y periodistas, acerca de los problemas fundamentales de la realidad peruana, del modelo de economía, Estado y sociedad que se pretendía construir y, desde luego, respecto de las perspectivas del Perú y América Latina.

El gobierno, por su parte, contaba con aliados y asesores muy destacados provenientes especialmente de corrientes y agrupaciones reformistas y nacionalistas radicales con presencia importante en medios sindicales, académicos e intelectuales. Por todo esto, se puede reiterar la pregunta: ¿Cómo así pudo ser sorprendido el prestigioso y poderoso gobierno militar del presidente Velasco Alvarado? Por supuesto, se nos puede decir que han habido muchos casos en la historia de sorpresas y caídas inesperadas de gobiernos mucho más fuertes e, inclusive, como nos enseñan experiencias recientes, de derrumbe y colapso de sistemas políticos todopoderosos construidos durante décadas enteras. Con esto no pretendemos cerrar el debate sino, más bien, provocarlo.

*Fue el primer y último gran susto que se llevó
el gobierno del general Juan Velasco Alvarado*

El gobierno militar presidido por el general Juan Velasco Alvarado, había cumplido seis años y cuatro meses en el ejercicio del poder político. Entre el Golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 y el 5 de febrero de 1975, el general Velasco Alvarado, sus ministros y los equipos de militares que lo secundaban, habían gobernado el país sumando progresivamente una serie de éxitos políticos con relación a su discurso nacionalista y dentro de lo que ellos mismos denominaban Plan del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas («Plan Cahuiide»). Superadas las iniciales diferencias o discrepancias al interior de la alta oficialidad de las tres armas, había terminado por imponerse la unidad institucional del Ejército, la Marina y la Aviación. La hegemonía dentro de esa unidad la tenía la oficialidad del Ejército. Por otro lado, no habían tenido que enfrentar ninguna resistencia social o política que fuera significativa; más bien, se ganaron la simpatía, cuando no el apoyo, de importantes sectores de trabajadores y masas populares. Por todo ello, seguramente para quienes controlaban el poder del Estado los acontecimientos del 5 de febrero constituyeron lo más inesperado posible de cuanto peligro se podía imaginar para la estabilidad política y sólo comparable con relámpago en cielo sereno. Pero ahora sería bueno saber que tan sereno estaba el cielo.

Afirmados en el pleno control del aparato del Estado y bajo el impacto de sus primeras medidas políticas, los militares desalojaron desde un principio y sin miramientos los restos de poder oligárquico que aún quedaban en las esferas de la política nacional. Llevaron a cabo una serie de nacionalizaciones y estatizaciones de empresas privadas que por mucho tiempo o casi eternamente habían estado en manos de sus dueños extranjeros o peruanos («Los dueños del Perú», como los llamaba en su afamado libro el Ing. Carlos Malpica). Una de las primeras y más impactantes medidas en ese sentido fue la nacionalización de los yacimientos petrolíferos de la Brea y Pariñas y cuya reivindicación se había constituido en un símbolo de las luchas nacionalistas y antiimperialistas por más de medio siglo.

También fueron nacionalizadas o estatizadas poderosas empresas mineras de capital imperialista como la Cerro de Pasco Corporation y la Marcona Mining Company. Y, sobre todo, los militares velasquistas se dieron el lujo de protagonizar nada menos que la Reforma Agraria en el Perú, también constituido en otro símbolo de prolongados y recurrentes reclamos de carácter antigamonal y antiterrateniente, a partir del manifiesto que el propio presidente Velasco Alvarado leyera ante la nación el 24 de junio de 1969 con motivo de la celebración del Día del Indio y que a partir de entonces se llamaría Día del Campesino. En ese mismo acto se promulgó la respectiva Ley de Reforma Agraria. Dicha reforma comenzó inclusive horas antes de la lectura del manifiesto y de la promulgación de la Ley, con la intervención del Ejército en el control y administración de las grandes haciendas azucareras de la Costa Norte, desalojando a los «barones del azúcar» de su poder considerado ilimitado e intocable. En el transcurso de los meses y años siguientes la mayor parte de las haciendas del país les habían sido arrebatadas (expropiadas) a sus sempiternos dueños (caciques, gamonales, terratenientes, etc.) y cuya nueva posesión y usufructo se les había cedido a las comunidades indígenas y en general a las poblaciones campesinas. También, se habían llevado a cabo reformas en el sector industrial llegando a crear, por ejemplo, la «comunidad industrial». Algo más. El gobierno del General Velasco Alvarado restableció relaciones diplomáticas con Cuba revolucionaria y estableció por primera vez relaciones diplomáticas con la Rusia Soviética, con la China Comunista de Mao Tse-Tung y con casi todos los países que pertenecían al entonces campo socialista. En 1974, el gobierno militar sorprendió a medio mundo con la expropiación de los periódicos y otros medios de comunicación. Los dueños de los medios de prensa nunca habían tenido, por decir lo menos, identificación alguna con las reformas del gobierno militar. En realidad, tampoco habían tenido mayor identificación con los grandes problemas nacionales y con las grandes urgencias de la inmensa mayoría de peruanos. Obviamente, siempre ha habido periodistas libres y con independencia de criterio pero esto es otro asunto. Desde luego, producida la expropiación, ínfimas minorías en el Perú y en el extranjero habían denunciado a grito pelado el tan grave atentado contra la «libertad de prensa».

En el transcurso de 7 años, el presidente Velasco Alvarado y su gobierno no habían enfrentado conflictos gremiales o políticos que pudieran ser significativos. Apenas habían sido objeto de críticas más teóricas que políticas por parte de las diversas tendencias de la oposición: APRA, partidos y agrupaciones de la izquierda revolucionaria (maoístas, trotskystas, castristas, guevaristas, marxista-leninistas, socialistas a secas, etc.), derecha belaundista, extrema derecha pepecista, etc. Simultáneamente, tuvieron lugar unos que otros paros y huelgas por parte de sindicatos como el del SUTEP recién fundado, de los trabajadores mineros de Toquepala y Cuajone, de Centromín y otros. Las críticas eran básicamente al modelo de sociedad y Estado peruanos que se quería construir. Los propios militares en el

poder o sus voceros se defendían sosteniendo que el de ellos era un gobierno de carácter antifeudal, antioligárquico y antiimperialista y, al mismo tiempo, un gobierno que se proponía construir una economía y una sociedad que fuera libertaria y de participación plena, «no comunista y no capitalista». Para algunos de los más lúcidos críticos de aquella experiencia, lo que estaba ocurriendo en el Perú era una muy tardía construcción de un capitalismo de Estado. Como se puede observar, las aguas del debate constituían un inmenso mar. Había mucho de claridad pero también algo de confusión. O quizás al revés. Refiriéndose a estas cosas, en un oportunidad un periodista preguntó al historiador Pablo Macera sobre qué es lo que estaba sucediendo en el Perú. ¿Revolución?, ¿reformas?, ¿reformismo nacionalista?, ¿comunismo?, ¿capitalismo de Estado?, ¿modernización capitalista? La respuesta del Dr. Macera fue más o menos la siguiente: «No se preocupe, lo que pasa es que el Perú recién está entrando al siglo xx».

De manera paralela a sus realizaciones y a sus discursos, el gobierno militar decidió orientar y conducir directamente la organización y movilización de sectores de trabajadores y masas populares tanto en el campo como en la ciudad, comenzando por aquellos sectores inmersos en los procesos de reformas; la intervención del gobierno en este terreno, significaba no sólo entrar en competencia con la organización y movilización autónomas e independientes impulsadas por partidos políticos y movimientos sindicales sino, también y peligrosamente, revelaba el intento de anularlos o destruirlos para luego uncir a sus bases al burocrático carro del gobierno y del Estado. Quizás, se pretendía hacer, sabiéndolo o no, algo parecido a lo ocurrido en México desde los años 30 cuando el presidente Lázaro Cárdenas y el PRI impusieron la organización corporativa de los trabajadores y de gran parte de la sociedad. El gobierno militar creó aparatos como Sinamos para pautar la organización y movilización de obreros, campesinos, estudiantes, pobladores de barriadas o Pueblos Jóvenes, etc. En tal sentido, el apoyo que se organizaba para defender las ideas y las realizaciones del gobierno militar era segmentado y de compartimentos estancos impidiendo, por lo mismo, la articulación y las relaciones horizontales. En el transcurso de 1974 ya eran cada vez más notorias las dificultades y limitaciones de aquellos intentos de organización corporativa; en cierto modo, se estancaban o retrocedían frente a las organizaciones autónomas de los trabajadores. Sin embargo, desde las alturas del poder todavía no se percibía con claridad que esa experiencia ya constituía un problema grave y que estaba destinado al fracaso en el corto o mediano plazo.

Lo anterior podría invitar a una cierta incredulidad o al debate, pero hay algo que está fuera de toda duda y discusión. Un enorme y grave problema que tuvo que enfrentar el gobierno del presidente Velasco Alvarado fue la crisis internacional de la economía capitalista que se desencadenó en el segundo semestre de 1973 y cuyo impacto y reproducción fueron inmediatos en América Latina y concretamente en el Perú. El estallido de dicha crisis tuvo lugar en los países capitalistas

avanzados y desarrollados y cuyas principales manifestaciones externas fueron la recesión industrial y la desocupación masiva de mano de obra calificada. En el caso peruano y mirando retrospectivamente, esta crisis se fue constituyendo, de manera casi imperceptible, en una especie de larga antesala de lo que sería el término del mandato velasquista y el cual sucedió a través de un Golpe de Estado a fines de agosto de 1975. Aunque oficialmente no se quería admitir, o quizás se ignoraba en algunos casos, de manera simultánea al desarrollo de esta crisis y a despecho de los discursos más encendidamente nacionalistas y triunfalistas, fue haciéndose cada vez notorio tanto para observadores nacionales como extranjeros la contención progresiva de las reformas y en particular de la reforma agraria. Basta recordar la disminución paulatina de la ayuda técnica y crediticia del Estado a los cooperativistas y trabajadores del mundo agrario. Ciertamente, a pesar de su gravedad creciente, esta crisis de la economía aún no asustó al gobierno y directamente no hizo tambalear su poder. Recién los acontecimientos del 5 de febrero de 1975 constituyeron el primer y último gran susto para el gobierno del presidente Velasco Alvarado. Lo del susto, viene de unos comentarios que hacía Aníbal Quijano cuando mirábamos titulares de periódicos sobre los candentes y caóticos momentos del 5 de febrero que había vivido Lima y, entonces, Aníbal dijo: «este el primer gran susto que se lleva el gobierno militar del general Velasco Alvarado». Pero a estas alturas y transcurridos 30 años, habrá que reconocer que en el trasfondo de esos acontecimientos estaban, quizás todavía invisibles para el simple espectador o para el periodista que anda cazando noticias, los efectos de la crisis acumulados a diario desde setiembre-octubre de 1973 y cuyas víctimas no podían ser sino, como siempre ocurre, las inmensas mayorías de peruanos: resquebrajamiento de las condiciones materiales de existencia, lenta pero real desocupación en el sector industrial, disminución o congelación de sueldos y salarios, amenazas de reducción de personal, etc. Pues, entonces, el cielo no estaba tan sereno y ya habían habido nubarrones anunciando situaciones difíciles y complicadas y éstas se fueron configurando dramáticamente una detrás de otra.

5 de febrero: soledad del presidente Velasco Alvarado

Llamó la atención de mucha gente, en el Perú y en el extranjero, de que habiendo amanecido Lima y sus alrededores, desguarnecidos de toda protección policial no aparecieran desde tempranas horas de la mañana contingentes de la Guardia Republicana, de la PIP y especialmente del Ejército y la Marina para brindar protección a la ciudad asumiendo el control y la vigilancia de puntos claves y estratégicos. Han pasado 30 años y aún no se sabe con precisión si el gobierno impartió órdenes y no fue obedecido por quienes tenían mando directo de aquellos contingentes de tropas, o simplemente el gobierno se sintió arrogante y confiado y no dio ninguna disposición a nadie. Lo cierto es que hubiera sido suficiente que tropas del Ejército de la Segunda

Región-Lima hubieran salido del polígono del Rímac desde las primeras horas de la mañana y posesionarse en determinados lugares. Esto no ocurrió. En el supuesto de que las órdenes hubieran sido dadas por el presidente Velasco o por el Comité Asesor del Presidente (COAP), antes o a partir de las 10:00 am, la verdad es que las tropas de la Segunda Región-Lima que estaban al mando del general Rodríguez Figueroa no salieron hasta la 1:00 pm. Simplemente, el jefe de la revolución peruana fue desobedecido. En todo caso, el responsable principal de lo que se hacía o no se hacía era el general Francisco Morales Bermúdez, quien apenas unos días antes había asumido los cargos de Primer Ministro y Comandante General de las Fuerzas Armadas. Su inmediato subordinado en Lima era el general Leonidas Rodríguez Figueroa y quién no atinó a tomar ninguna acción preventiva o disuasiva. Estos hechos nos permiten imaginar la soledad política del presidente Velasco Alvarado en esas horas críticas del 5 de febrero de 1975.

Se trata, en realidad, no sólo de imaginar aquella soledad sino de verificar y constatar un problema mucho más complejo: la agudización de conflictos que se habían estado dando al interior mismo de las Fuerzas Armadas y más precisamente en el seno de la oficialidad. Probablemente desde el estallido de la crisis internacional de la economía capitalista, comenzaron a desarrollarse por lo menos dos tendencias a nivel de la oficialidad de las Fuerzas Armadas: a) por la profundización y continuidad de las reformas; b) por la contención y apaciguamiento de esas reformas. En ese contexto tenían lugar, además, disputas de orden personal por ocupar puestos de preferencia en el aparato del Estado y a nivel de la cúpula del poder político. Se pueden recordar conflictos de esa naturaleza, por ejemplo, entre los generales Rodríguez Figueroa y Javier Tantaleán Vanini o entre los generales Fernández Maldonado y Francisco Morales Bermúdez. Estos conflictos entre los representantes de las principales tendencias ideológicas y políticas al interior de las Fuerzas Armadas y de la oficialidad, cobraron toda su sangre fría y brutalidad en las tres o cuatro horas del 5 de febrero en las que Lima y el Callao fueron escenarios de incendios de numerosos locales y de saqueo de centros comerciales en sus diferentes barrios y distritos. La dimensión agresiva de esta brutalidad militar ya había sido puesta en práctica unas horas antes cuando en la madrugada del mismo día tanques del Ejército, bajo el mando del general Leonidas Rodríguez Figueroa ingresaron violentamente al local de Radio Patrulla en el distrito de La Victoria y aplastaron a cientos y cientos de guardias civiles muchos de los cuales nunca llegaron a tener una tumba para el descanso de sus restos. Así comenzó la trágica historia de los «desaparecidos» en la agitada vida política peruana de la segunda mitad del siglo xx. De esa manera, a sangre y fuego, fue debelada la huelga de la Guardia Civil, sin tomar en cuenta que los huelguistas daban a conocer su rendición pacíficamente y sin condiciones.

En los días siguientes a estos hechos, la prensa trataba de explicar el carácter de los mismos acudiendo, como siempre lo hace, a entrevistas a personajes de la políti-

ca, funcionarios, intelectuales, etc. Entre tantas declaraciones, hubo una muy lacónica pero contundente. Radio Caracol de Colombia entrevistó telefónicamente al jefe del APRA Víctor Raúl Haya de la Torre, quien a sus 80 años de edad se encontraba en su residencia de Villa Mercedes, preguntándole qué opinión o interpretación tenía de los hechos ocurridos el 5 de febrero y la respuesta fue la siguiente: «Se ha resquebrajado la unidad de las Fuerzas Armadas». Esta declaración tocaba un aspecto neurálgico del aparato del Estado y seguramente puso de vuelta y media a quienes aún integraban los círculos de confianza del general Velasco Alvarado y, a su vez, alentó a personajes como el general Francisco Morales Bermúdez y compinches a urdir desde entonces el Golpe de Estado que se produciría seis meses más tarde.

¿Quién dirigió las marchas, los saqueos e incendios?

A partir de las 10 de la mañana del 5 de febrero, diferentes calles y avenidas del centro histórico de Lima comenzaron a ser recorridas por grupos aparentemente dispersos y desconectados entre sí pero que se manifestaban con gestos y actitudes parecidos, haciendo circular el rumor de que aparecerían mayor cantidad de personas y de grupos para apoderarse de la situación e imponer su presencia en una ciudad sin protección alguna. En efecto, especialmente en las avenidas Wilson (hoy Garcilaso de la Vega), La Colmena, Alfonso Ugarte y en la Plaza San Martín fueron apareciendo de manera creciente turbas de jóvenes que llamaban a algo así como una rebelión contra el gobierno militar. Más o menos entre las 11 y las 12 de la mañana, cientos de jóvenes recorrían las avenidas de La Colmena y Wilson, empujando carretillas que llevaban gasolina en galones o bidones. Este combustible sirvió, por ejemplo, para incendiar el local del famoso Casino Militar (Círculo Militar) que se encontraba en uno de los portales de la Plaza San Martín y, también, del gigantesco y lujoso auditorio del moderno y recientemente construido Centro Cívico que se encontraba en la Av. Wilson. Igualmente, en la recta anterior de la misma Av. Wilson, entre el jirón Uruguay y el jirón Bolivia, fue incendiado el local del periódico *El Correo*. Se intentó hacer lo mismo con el local del periódico *Expreso* que quedaba en el Jr. Ica, muy cerca de la Av. Tacna. Mientras tanto, otras turbas integradas por gente de sectores mayormente populares, procedentes de distritos y barrios empobrecidos como el Rímac, Bajo el Puente, Barrios Altos, Matute y La Victoria y de barriadas o pueblos jóvenes relativamente cercanos, se constituyeron en los protagonistas de los saqueos a tiendas y centros comerciales del centro histórico de Lima, del Mercado Central, de la Av. Abancay, de la Av. Wilson, de la Av. Alfonso Ugarte, de la Av. Manco Cápac, etc. Grupos y turbas enteras de gentes se cargaban todo tipo de productos de las tiendas y centros comerciales, desde víveres hasta vestidos, joyas y artefactos electrodomésticos. En breves minutos quedaron vacíos, por ejemplo, los entonces gigantescos centros comerciales como los de Monterrey, Scala Gigante y otros.

Debe subrayarse que fueron multitudes procedentes de sectores empobrecidos y populares quienes se apoderaron por unas horas de escenarios urbanos como Lima y algunos de sus distritos. Si hacia la 1:00 de la tarde o poco después no hubieran aparecido en las calles los tanques del Ejército, probablemente estas masas juveniles y populares enfurecidas hubieran avanzado hacia Miraflores y San Isidro y los blancos de su furia podrían haber sido mansiones, edificios públicos, edificios de empresas privadas, bancos, lujosos locales comerciales, etc.

El gobierno militar tenía adversarios políticos desde la extrema izquierda, pasando por movimientos socialdemócratas, socialcristianos y centristas, hasta la extrema derecha. En ese entonces se especulaba de que algunas de esas tendencias podían haber dirigido los violentos acontecimientos del 5 de febrero. El propio gobierno no hizo público ningún manifiesto de forma inmediata pero sí lo hizo indirectamente a través de sus voceros o personas de su confianza que dirigían los periódicos estatizados y otros medios de comunicación. Entre ellos, era *La Crónica* el principal vocero periodístico del gobierno y se encontraba bajo la dirección del escritor y periodista Guillermo Thorndike y en el que colaboraban numerosos escritores e intelectuales. A través de este periódico se sostuvo la idea, por no decir la denuncia, de que el APRA y su jefe Víctor Raúl Haya de la Torre habrían estado en la dirección política de los violentos hechos del 5 de febrero. Es más. Buscando demostrar la veracidad de la dirección aprista, en días sucesivos se publicaron imágenes de grupos de jóvenes que se suponía eran apristas participando de manera protagónica en los incendios de los locales ya mencionados. Incluso, en algunas de esas imágenes aparecía un joven alto, melnudo y con patillas que podría haber sido alguien parecido al entonces desconocido Alan García Pérez y que a la sazón tenía unos 25 años de edad. A nadie se le ocurría decir que la dirección política de los sucesos podría haber estado en manos de las organizaciones o partidos de la izquierda revolucionaria o de las agrupaciones y movimientos de la derecha. Al mismo tiempo, se dejó en un segundo plano la discusión o las especulaciones para saber qué fuerzas políticas o económicas podrían haber estado detrás de la huelga de la Guardia Civil. ¿Podría haber sido alguna fracción de la derecha cavernaria o tradicional?

El APRA y todos sus líderes negaron en todos los tonos cualquier responsabilidad de dirección política en los sucesos del 5 de febrero. Además del propio gobierno, también las agrupaciones de la izquierda revolucionaria, los movimientos sindicales como la CGTP y sus afiliados y, en fin, las diversas tiendas de la derecha, se inclinaban a pensar o a creer de que al APRA le correspondía la única responsabilidad por aquellos sucesos. Todavía casi dos semanas después del 5 de febrero, el mismísimo Presidente de la República, general Juan Velasco Alvarado, leyó un manifiesto a la nación en el cual responsabilizaba de manera enfática al APRA y a su jefe Haya de la Torre. Desde luego, Haya de la Torre nunca se dio el trabajo de responder de manera directa. Más bien, algunas veces hacía alusio-

nes irónicas acerca de las muy modestas concepciones teóricas e ideológicas de sus acusadores y adversarios.

Han transcurrido 30 años de la huelga de la Guardia Civil, de los incendios y saqueos de Lima y aún no se sabe con claridad y precisión qué organizaciones o fuerzas políticas podrían haber constituido la dirección de esos sucesos. Pero sí es posible explicarse el trasfondo de los mismos tomando en cuenta el hecho de la ampliación y profundización de la crisis económica en el Perú, en el contexto de la crisis internacional capitalista que venía desarrollándose, como ya se dijo, desde el segundo semestre de 1973 y cuyas mayores manifestaciones eran la recesión industrial, la inflación y la desocupación masiva de mano de obra calificada en los propios países capitalista desarrollados. Hoy se puede recordar que en el transcurso de 100 años el sistema económico internacional sufrió tres grandes crisis. La que estalló en 1973 fue la tercera. Para las inmensas mayorías del mundo había llegado a su fin la sensación de bienestar y prosperidad que había estado ocurriendo desde el término de la Segunda Guerra Mundial. Para la inmensa mayoría de peruanos, también estaba llegando a su fin una similar sensación de bienestar y prosperidad, al resquebrajarse el precario y débil piso de la modernización económica que había venido desarrollándose por espacio de 25 o 30 años. Desde el segundo semestre de 1973 fueron resquebrajándose y debilitándose las ya crónicamente modestas condiciones materiales de existencia de los trabajadores y pobres del campo y la ciudad; en ese contexto se habían estado achatando de manera lenta pero sistemática los sueldos y salarios y, también, empezaba a hacerse sentir la desocupación de la mano de obra asalariada en el ficticio sector industrial. También para los empleados del Estado (más de medio millón de empleados en los ministerios y en el conjunto de la administración pública, más de 150 mil maestros de escuelas y colegios, más de 100 mil miembros de la Guardia Civil, de la Guardia Republicana y de la PIP, profesores universitarios, etc.) había comenzado el estancamiento o congelación irreversibles de sus sueldos y salarios. Irreversibles hasta hoy. Igualmente, en los sectores económicos en los que estaban en marcha las reformas, especialmente la Reforma Agraria, los trabajadores cooperativizados y de las SAIS empezaron a enfrentar dificultades de carácter económico y comercial. Al desencadenarse la crisis económica, el gobierno militar y el Estado dejaron de brindar apoyo técnico y crediticio a los sectores cooperativizados porque, al mismo tiempo, se hacía cada vez más difícil la importación de los materiales y componentes requeridos.

El piso económico de la sociedad peruana, especialmente en sus sectores aparentemente modernizados, se había estado haciendo trizas. Sobre ese piso, cualquier cosa podría haber sucedido. Estaban ocurriendo una serie de paros y huelgas de trabajadores en el sector industrial pero eran asumidos como parte de lo cotidiano. Pero lo que ocurrió en términos espectaculares y dramáticos fue, pues, la huelga de la Guardia Civil y los violentos sucesos del 5 de febrero. En el

caso de haberse dado una o más direcciones políticas para producir esos hechos, sólo en una situación de pobreza creciente como la de entonces podían haber aparecido protagonistas enfurecidos, seguidores o partidarios. Puede decirse que en una situación como la de aquellos tiempos, bastaba una chispa para incendiar la pradera.

Lima, 4 de febrero de 2005

BIBLIOGRAFÍA

Acerca del Perú en la década de los 70 y sobre el carácter de las diversas reformas dirigidas por el gobierno militar de entonces, hay abundante bibliografía y una buena parte de ella fue producida al ritmo de los procesos mismos en marcha. En cambio, es poco lo que se conoce sobre acontecimientos específicos como los del 5 de febrero de 1975 y, por eso, en este caso nos hemos limitado básicamente a la consulta de las fuentes primarias. La experiencia política peruana de aquella década ha sido probablemente una de las más intensamente debatidas de toda la historia nacional del siglo XX. Se debatió en el Perú y en el extranjero. Por ahora, apenas podemos entregar unas cuantas referencias al respecto.

COTLER, CLEVES, FITZGERALD, LOWENTHAL, NORTH, THORP y otros
1985 *El gobierno militar. Una experiencia peruana 1968-1980*. Instituto de Estudios Peruanos. Lima.

BÉJAR, Héctor
1976 *La revolución en la trampa*. Edic. Socialismo y Participación, Lima.

FRANCO, Carlos
1974 *La revolución participatoria*. Mosca Azul, Lima.
1975 *Perú, participación popular*. Mosca Azul, Lima.

GUERRA GARCÍA, Francisco
1975 *El peruano, un proceso abierto*. Libros de Contratiempos, Lima.

PANFICHI HUAMÁN, Aldo
Los sucesos del 5 de febrero: Una aproximación de estudio. Tesis (Br.) PUCP, Programa Académico de Ciencias Sociales. Mención: Sociología

PEASE GARCÍA, Henry
1976 *El ocaso del poder oligárquico: Lucha política en la escena oficial, 1968-1975*. DESCO, Lima.

QUIJANO, Aníbal

1971 *Nacionalismo, neoimperialismo y militarismo en el Perú*. Edic. Periferia, Buenos Aires.

VELASCO ALVARADO, Juan

1972 *Velasco, la voz de la revolución*. Edc. Participación, Lima.

VILLANUEVA, Víctor

1972 *EL CAEM y la revolución de la Fuerza Armada*. Instituto de Estudios Peruanos, Lima.